



JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE MEDELLÍN
Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

AUTO DE SUSTANCIACIÓN
RADICADO N° 2021-00622-00

Vistos los memoriales que anteceden se accede a lo solicitado y, en consecuencia, se le reconoce personería jurídica para actuar dentro del presente proceso a la Dra. VERÓNICA RODRÍGUEZ ADARVE, identificada con tarjeta profesional N° 279.028 del C. S de la J., para representar a la parte ejecutante en los términos del poder a ella conferido. (art. 74 del C. G del P.).

De otra parte, atendiendo a la respuesta allegada por parte de la oficina de registro de instrumentos públicos de esta localidad, y ante la solicitud allegada por la parte actora, se le aclara que si bien en efecto debe darse aplicación a la prelación de créditos con miras a materializar su derecho sustancial, con tal propósito corresponde darle aplicación a la prelación de embargos, a voces del art. 465 del Código General del Proceso, y en ocasión a ello oficiar al juez civil que ordenó la inscripción de la medida a que refiere la memorialista, con el fin de que, de la suerte del remate del bien que soporta la cautela, proceda a distribuir entre todos los acreedores, lo obtenido producto de dicha almoneda, momento en el cual dará aplicación a la prelación de créditos.

Sin embargo, atendiendo a que no obra en el expediente certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula N° 001-144173, objeto de la medida cautelar de embargo que solicita la parte demandante, en el cual conste la anotación N° 25 referida en la nota devolutiva de la oficina de instrumentos públicos, y que permita identificar plenamente que oficina de ejecución civil del circuito ordenó el embargo del inmueble ya referido, se requiere a la parte demandante, para que allegue el certificado de libertad y tradición actualizado con el fin de expedir el oficio correspondiente o en su lugar certifique mediante oficio o algún otro medio de prueba conducente, a cargo de que autoridad judicial se encuentra la medida de marras, para con ello proceder de conformidad como lo dispone el art. 465 ejusdem.

Igualmente, este despacho le aclara a la parte demandante que habrá de advertirse que las peticiones que se formulen ante los jueces referidos a actuaciones estrictamente judiciales, como es el caso que se trata, se encuentran reguladas en el Código General

del Proceso, y como tal se sujetan a los términos y etapas procesales previstos para el efecto. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-311 de 2013 y Sentencia T-172/16 reiteró su tesis jurisprudencial sobre el derecho de petición dentro del trámite de un proceso, así: *“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la Litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”*.

Así las cosas, puede entonces concluirse que para distinguir si las solicitudes presentadas en un proceso judicial en curso constituyen una petición independiente o sí, por el contrario, hace alusión a una actuación procesal, es necesario establecer su esencia, de tal manera que, se debe identificar si la respuesta implica una decisión judicial sobre algún asunto relacionado con la Litis o con el procedimiento, casos en los cuales la contestación equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional y así, el juez, por más que lo invoque el petente, no está obligado a responder bajo las previsiones normativas del derecho de petición sino que, en acatamiento al debido proceso, deberá dar prevalencia a los términos, procedimiento y contenidos de las actuaciones que correspondan a la situación, a las cuales deben sujetarse tanto el juez como las partes.

NOTIFÍQUESE.



CARLOS HUMBERTO VERGARA AGUDELO

JUEZ